

TITULO: PROGRAMAS ASISTENCIALES. Obligación del Estado Nacional de remitir a las provincias los fondos previstos en la ley 24049. Manutención de comedores escolares e infantiles. AMPARO. Medida cautelar innovativa S. 2597. XXXVIII ORIGINARIO - "Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo" - CSJN - 19/09/2002.

fc

Asesoramiento Jurídico a Docentes
Dr. Fernando Carlos IBÁÑEZ
Docente – Abogado

Tel: (011) 4487 – 1496
abogado@fernandocarlos.com.ar
www.fernandocarlos.com.ar

RESUMEN: "El peligro en la demora se considera configurado. El requisito en estudio debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros, y es preciso señalar que la situación existente de público y notorio conocimiento exige que se dé estricto cumplimiento a los programas asistenciales que motivan la acción. Los argumentos expuestos invocados por el Estado provincial requieren el dictado de medidas que resguarden los derechos invocados hasta tanto exista la posibilidad de dirimir el punto debatido y de esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca."

"No empece a lo expuesto que en el caso se trate de una medida cautelar innovativa a fin de que se modifique el incumplimiento que se denuncia, pues si bien este Tribunal ha considerado a ese tipo de medidas como una decisión excepcional, por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (conf. Fallos: 316:1833 y 319:1069), la ha admitido cuando existen fundamentos de hecho y de derecho que exigen una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los intereses en juego. Es de la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy difícil o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 320:1633). En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el dictado de una medida cautelar, en el caso aparece con suficiente claridad que el mantenimiento de la situación existente si no se accediese a la medida y finalmente le asistiese razón a la provincia podría generar daños que deben ser evitados."

TEXTO COMPLETO

Fallo publicado en www.fernandocarlos.com.ar

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2002.//-

Autos y Vistos y Considerando:

1º) Que a fs. 21/28 el gobernador de la Provincia de Salta inicia la presente acción de amparo contra

el Estado Nacional a fin de hacer cesar la arbitraria e ilegítima omisión en que habría incurrido respecto de su obligación de remitir los fondos previstos en la ley 24.049 (Ley de transferencia de servicios educativos de la Nación a las provincias, cuyo texto completo se encuentra en la www.fernandocarlos.com.ar), los que resultan necesarios para que el Estado provincial mantenga los comedores escolares e infantiles que funcionan en su territorio.-

2º) Que al efecto expone que la alimentación que se provee a los menores en las escuelas públicas se enmarca en el "Programa Social Nutricional" y en el "Programa de Políticas Sociales Comunitarias" y se financia con la obligación asumida por el gobierno nacional en los arts. 14 y 15 de la ley 24.049. Dichas disposiciones dictadas a fin de transferir a las provincias los servicios educativos administrados hasta su sanción, previeron la asignación de un fondo que debía retenerse de las sumas coparticipables en forma previa a la distribución secundaria, con destino al financiamiento de los servicios educativos que se transferían y los correspondientes al costo de los programas asistenciales a los que se ha hecho referencia.-

Relata que entre marzo y julio del corriente año el Estado Nacional no cumplió regularmente con la obligación referida y que en el mes de agosto el incumplimiento fue absoluto. A raíz de ello, según sostiene, se viola el principio de legalidad, y en consecuencia la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional y, específicamente, la garantía establecida a favor de las provincias en el art. 75, inc. 2º, quinto párrafo de ese cuerpo legal. En el caso, y en mérito a los intereses que se encuentran en juego, la conculcación de las garantías establecidas en la Carta Magna amenaza indirectamente el derecho a la vida, derecho primario que tiene resguardo constitucional y que se encuentra amparado en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Convención sobre los Derechos del Niño, normas internacionales que, ratificadas por nuestro país, deben ser estrictamente acatadas.-

fc

*Mantenga actualizada
su Normativa de Educación.*

Solicite actualizaciones a:

normas@fernandocarlos.com.ar

Tel: (011) 4487 – 1496

3º) Que la Provincia de Salta requiere que se dicte una medida cautelar, hasta tanto este Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto sometido a decisión judicial, por medio de la cual se ordene a la Subsecretaría de Relación con las Provincias de

la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación que cumpla con la remisión de los fondos ya aludidos a fin de evitar la lesión real y actual que dicho incumplimiento genera.-

4°) Que de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General en el dictamen de fs. 29/30, a cuyos fundamentos y conclusiones es dable remitir en razón de brevedad, la presente causa corresponde a la jurisdicción originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional.-

**fc Actos Públicos – Fechas de inscripción
Demás info de La Matanza**

Recíbala por correo electrónico.
Solicítela a:

matanza@fernandocarlos.com.ar
Tel: (011) 4487 – 1496

5°) Que en el presente caso, de los antecedentes agregados a la causa surgen, a juicio del Tribunal, suficientemente acreditados los requisitos exigidos por los arts. 230 incs. 1° y 2° y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que se hará lugar al pedido.-

6°) Que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no () depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. En ese marco en el sub lite se presenta el fumus boni iuris -comprobación de apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria (Fallos: 314:695 y 711).-

7°) Que lo mismo debe concluirse con relación al peligro en la demora, que se considera configurado. El requisito en estudio debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros, y es preciso señalar que la situación existente de público y notorio conocimiento exige que se dé estricto cumplimiento a los programas asistenciales que motivan la acción. Los argumentos expuestos invocados por el Estado provincial requieren el dictado de medidas que resguarden los derechos invocados hasta tanto exista la posibilidad de dirimir el punto debatido y

de esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca.-

**fc Reciba información sobre
Cursos – Carreras – Congresos – etc.**

Solicite el Boletín Mensual a:

cursos@fernandocarlos.com.ar
Tel: (011) 4487 – 1496

8°) Que no empece a lo expuesto que en el caso se trate de una medida cautelar innovativa a fin de que se modifique el incumplimiento que se denuncia, pues si bien este Tribunal ha considerado a ese tipo de medidas como una decisión excepcional, por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (conf. Fallos: 316:1833 y 319:1069), la ha admitido cuando existen fundamentos de hecho y de derecho que exigen una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los intereses en juego. Es de la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva (Fallos: 320:1633). En el estrecho marco de conocimiento que ofrece el dictado de una medida cautelar, en el caso aparece con suficiente claridad que el mantenimiento de la situación existente si no se accediese a la medida y finalmente le asistiese razón a la provincia podría generar daños que deben ser evitados.-

Por ellos se resuelve:

I.- Declarar que la presente causa corresponde a la jurisdicción originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional;

II.- Hacer lugar a la medida cautelar pedida, y en consecuencia ordenar al Estado Nacional que por intermedio de la Subsecretaría de Relación con las Provincias de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, remita a la Provincia de Salta los fondos en cuestión correspondientes al mes de agosto próximo pasado y los subsiguientes hasta tanto se dicte una sentencia en este proceso de amparo.

Notifíquese por cédula a la parte actora y la medida cautelar por oficio.-

FDO.: JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE
O'CONNOR - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO -
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO
BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ -
GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO
VAZQUEZ